

Canalizo.—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

Es copia. México, Setiembre 28 de 1872.—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 7 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de esta ciudad por Gabriel Covoy ó Corsis contra la comandancia militar de México que lo consignó al servicio de las armas, y considerando: que esa consignación se verificó en época en que no estaba suspenso el goce de la garantía á que se refiere el art. 5º de la Constitución federal, y que por lo mismo ataca ésta garantía, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 25 del mes próximo pasado por el juez 2º de Distrito de esta ciudad que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á Gabriel Covoy ó Corsis contra su destino al servicio militar, por haber sido violada con ello la garantía concedida por el art. 5º de la Constitución federal.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CO. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados- Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogasón.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Arza.*—*S. Guzmán.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis Mº Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre 11 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México, por los señores D. Miguel y D. Francisco Buch, contra el gobierno del Distrito Federal que obliga á los quejosos á cumplir con una resolución del Ministerio de Fomento, por la que se les exige, como propietarios de la hacienda de San Antonio, la limpia y compostura de los bordes del río de Churubusco.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El promotor dice: que los CO. Francisco y Miguel Buch se presentaron al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose de la orden del C. Gobernador que les mandó limpiar el río de Churubusco en terrenos que no pertenecen á la hacienda de San Antonio. Recibido el juicio á prueba, presentaron la copia del expediente seguido por el Ayuntamiento de Coyoacán, que contiene las disposiciones acordadas por la corporación para que se practicara la limpia por los CO. Buch, y las constancias que acompañan á su escrito. De estas, la principal es el oficio del C. Ministro de Fomento, en que declaró: que la cuestión sobre si la hacienda de San Antonio debe hacer la limpia en la parte reclamada, es del resorte de los tribunales.

Sin preocupar la cuestión de los derechos que recíprocamente tengan el Ayuntamiento de Coyoacán y los quejosos, suponiéndolos buenos por parte del primero, es evidente que no puede hacerlos efectivos por sí sino por medio de la autoridad judicial, como lo resolvió el Ministerio de Fomento en la comunicación citada; y lo contrario es á toda luz atentatorio á la Constitución y viola

las garantías consignadas en los artículos 5º, 16 y 27.

Dos puntos abraza la comunicacion de fojas 1ª que dió motivo al amparo: uno, el relativo al mandato del C. Ministro de Fomento, que contradiciendo su anterior determinacion dispuso se llevara á efecto la limpia por los CC. Buch y la que presta mérito al amparo, pues resuelve administrativamente lo que es del orden judicial, vista su oposicion, y otro la orden en que se comunicó á los CC. Buch, por el C. Gobernador, esa determinacion, y trae dos apercibimientos: uno, la protesta de que harán efectivos los daños y perjuicios que se ocasionen por no practicar la limpia, y otro que se impondrá la pena mayor que quepa en las facultades del Gobernador; pues bien, lo primero es una protesta, ó si se quiere, una amenaza; pero mientras no se haga efectiva, en nada perjudica ni de hecho ni de derecho á las personas ó intereses de los CC. Buch, y si llegara á ser, entonces cabria la oposicion legal de los CC. Buch, por los medios del orden comun, ó el amparo. Respecto á lo segundo hay que observar lo mismo, aunque en menor escala, pues la autoridad dice: que impondrá la pena mayor que quepa en sus facultades; esto es, obrando en la órbita legal y constitucional, lo que si no hiciere para esa vez, tendrían lugar las defensas de los CC. Buch.

Por lo expuesto, y dejando á salvo los derechos que legalmente tengan los CC. Buch y el Ayuntamiento de Coyoacan, y sin prejuzgarlos, lo cual es ajeno del presente juicio, puede declarar: que la Justicia Federal ampara á los CC. Miguel y Francisco Buch, contra la resolucion del C. Ministro de Fomento.

México, Agosto de 1872.—*Herrera Campos.*

SENTENCIA del C. Juez de Distrito.

Juzgado 1º de Distrito de México.—México, Setiembre 3 de 1872.—Visto el recurso de amparo interpuesto por los CC. Francisco Buch y Miguel Buch y Gonzalez, quejándose de que el C. Gobernador del Distrito Federal, en cumplimiento del acuerdo del Ministerio de Fomento, los obliga, violándose las garantías consignadas en los artículos 5º, 16 y 27 de la Constitucion general, á limpiar el rio de Churubusco en la parte comprendida entre el puente de este nombre y el de Buenos Aires, que está fuera de los linderos de la hacienda de San Antonio; sin que los terrenos de una y otra márgen del rio les pertenezcan, pues la del Norte está en tierras de la familia del C. José María Suarez, y la ribera del Sur en los de varios vecinos del Pueblo de Churubusco: visto el informe del mismo C. Gobernador; la prueba rendida por los quejosos, y el alegato presentado por su patrono, C. Lic. Manuel Dublan, en defensa de sus derechos; y considerando: que en diversas constancias de autos, y especialmente en las comunicaciones oficiales de fojas 9 y 11 dirigidas, la primera por el C. Gobernador del Distrito al juez que suscribe, por vía de informe con justificacion, y la segunda por el Cefe político de Tlalpam al C. Miguel Buch, se insiste en la obligacion que á juicio de dichos funcionarios tienen los dueños de la hacienda de San Antonio para hacer á su costa la limpia del cauce del rio de Churubusco, y á reforzar sus bordes en los puentes que señalan en su escrito de queja. Que la copia certificada de fojas 3 á 8 del cuaderno de prueba, remitida por el Ministerio de Fomento, y que forma parte de la que rindió el C. Lic. Dublan, acredita: que los propietarios de aquella finca han resistido siempre hacer la limpia de que se trata: que para vencer su oposicion se han

dictado diversas providencias, algunas de ellas conminatorias: se refiere en dicha copia certificada el extravío de expedientes instruidos, y aun se asegura que en ellos existían ejecutorias expedidas con el propio objeto, lo que confirma la opinión manifestada por el Ministerio de Fomento en oficio de 21 de Febrero de 1868 (fojas 3, cuaderno corriente), en el cual, atendiendo á que la cuestión sobre limpia del río en el presente caso, se reduce en sustancia á declarar el reconocimiento ó existencia de una servidumbre, esto corresponde al poder judicial por ser negocio de la competencia exclusiva de los tribunales. Que una vez declarada por la autoridad administrativa, su incompetencia para resolverlo, las providencias posteriores dictadas en sentido contrario, cuando faltan nuevos seguros datos que apoyen la revocación, no pueden ejecutarse sin violar la garantía consignada en el art. 16 de la Constitución general; y mucho menos previniendo el art. 1,141 del Código civil novísimo, que al que pretende tener derecho á una servidumbre, toca probar, aunque esté en posesión de ella, el título en virtud del cual la goza. Que este requisito tan importante, no se suple con la prueba testimonial inserta en la copia certificada de que se ha hecho referencia, pues adolece de graves defectos, entre los que desde luego se advierte la de haberse recibido sin citación de las partes entre cuyos intereses se promovió, sin la previa protesta que garantiza la verdad con que deben hablar los testigos; y sin que estos hayan dado sus declaraciones, uno después de otro con la debida separación, circunstancias todas que exigen como forma sustancial del acto las leyes 23 y 26, tít. 16, Part. 3^a, y que omitidas no fundan ni motivan la causa legal de un procedimiento. Que supuestos tales antecedentes, si la orden para limpiar el río ha de practicarse en terrenos que no pertenecen á

los CC. Buch, queda violada la garantía concedida en el art. 59 de la Constitución, porque se les obliga á prestar un servicio personal sin su pleno consentimiento y justa retribución: y si se les exige que lo hagan á su costa, este gravamen importaría la violación del art. 27 de dicho Código. Por cuyos fundamentos, teniendo á la vista la respuesta del Promotor fiscal, y las demás constancias de autos á que en lo necesario me refiero, debía declarar y declaro: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los CC. Francisco y Miguel Buch y Gonzalez, contra la resolución que motiva este recurso. Hágase saber; remítase copia certificada de esta sentencia al "Diario Oficial" y "Semanario Judicial," y los autos á la Corte Suprema de Justicia de la nación. El C. juez lo mandó y firmó: doy fé.—*José A. Bucheli.*—*Joaquín Sánchez Gonzalez*, secretario.

Es copia que certifico.—*Joaquín Sánchez Gonzalez*, secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 7 de 1872.—Visto el juicio de amparo que en 24 de Junio del corriente año promovieron ante el juez 1º interino de Distrito de México, los Sres. D. Miguel y D. Francisco Buch, contra la resolución del Ministerio de Fomento, fecha 14 de Mayo último, mandada cumplir por el gobierno del Distrito federal, en virtud de la cual se obliga á los promoventes, como propietarios de la hacienda de San Antonio, á limpiar y reforzar los bordes del río de Churubusco, en la parte comprendida entre el puente del mismo nombre y el punto de Buenos Aires, conminándolos el Gobernador para el caso de que no hagan la limpia, con la pena mayor que quepa en sus facultades y con el resar-

cimiento de los daños y perjuicios que se originen, cuya resolución afirman los quejosos que viola en sus personas las garantías que otorgan los arts. 16, 5 y 27 de la Constitución de la República Mexicana. Visto el informe del gobierno del Distrito federal y los documentos relativos, de cuyas constancias resulta: que la autoridad administrativa deduce las resoluciones que se le objetan, del deber que en su concepto tienen los propietarios de la finca de San Antonio, de hacer la limpia y abordamiento del río en los términos indicados. Vistos los pedimentos del Promotor fiscal: las pruebas rendidas y todo lo demás que de autos consta y ver convino.

Considerando 1º: que la cuestión que ha dado origen al presente recurso de amparo, es sobre la existencia y cumplimiento de una obligación civil por parte de los Sres. Buch; y que el punto sobre que versa el recurso es la resolución que en contra de esos Sres. ha pronunciado la autoridad administrativa con quien ellos han cuestionado. 2º: que la resolución de cuestiones como la de que se trata, es con arreglo á las leyes, de exclusiva competencia de la autoridad judicial y por los medios que aquella establece, y no de la autoridad administrativa como se ha verificado, según los actos de esta que los quejosos reclaman, puestas tal procedimiento importa la violación de la garantía que otorga el art. 16 de la Constitución Federal. Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Es de confirmarse y se confirma la sentencia del juez 1º interino de Distrito de México, dada á 3 de Setiembre próximo pasado, declarando: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los Sres. D. Miguel y D. Francisco Buch, contra la resolución del Ministerio de Fomento, fecha 14 de Mayo último, mandada cumplir por el gobierno del Distrito federal en los términos mencionados, contra la

cual se ha entablado el presente juicio de amparo.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre 12 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por el C. Hesiquio Aguirre contra el Cefe político de Salamanca que lo juzgó como saltador, sedicioso y traidor al Supremo gobierno.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor Fiscal dice: El día 12 del mes próximo pasado una fuerza que al mando del C. Rafael Ramos perseguía á una gavilla, capitaneada por Jesus M. Negrete, aprehendió en el rancho llamado del Curadero, á Hesiquio Aguirre, como sospechoso y por tener fama de mala conducta. Conducido á Pueblo Nuevo, el C. alcalde popular formó unas diligencias, examinando á tres testigos que estuvieron conformes en que Hesiquio Aguirre había pertenecido á la gavilla de Negrete, por lo que lo creían cómplice en los delitos cometidos por este. Dos testigos añadieron que habían sido